

LAS FORTALEZAS DE COLOMBIA

¿Una contradicción?

CARLOS ALBERTO PATIÑO VILLA *

Ha sido una posición frecuente, principalmente desde mediados de la década de 1980, pensar en Colombia como un país conflicto, con un Estado débil, sin capacidades para construir una institucionalidad estable, una democracia continua y real y unos derechos políticos que garanticen a sus ciudadanos la convivencia y el ejercicio de las libertades políticas. Tales posiciones han sido mantenidas desde sectores académicos y políticos internos de Colombia, como desde organismos internacionales, principalmente algunas de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales europeas dedicadas a la vigilancia de los derechos humanos, y desde organismos de seguimiento y análisis de conflictos internos.

En dichas posiciones no han faltado motivos y datos que las sustenten: el Estado colombiano ha sido incapaz de frenar la violencia que parece perpetuarse en su territorio; las instituciones públicas se han visto envueltas permanentemente en acciones de corrupción generalizadas; desde la aparición de los carteles de la droga, y principalmente de sus capacidades de asesinato, intimidación y terror, la sociedad colombiana se ha visto atrapada en un creciente conflicto en el que el Estado ha tenido

* Profesor asociado. Universidad Nacional de Colombia.

que recurrir a esfuerzos extremos para salvar la institucionalidad sin menoscabar el sistema político democrático.

Igualmente en la década de 1990 las fuerzas militares del Estado se vieron sometidas a una situación de derrota militar táctica ante los avances que durante la administración Samper hizo la guerrilla de las FARC, cuando propinó golpes insospechados a las fuerzas avanzadas de control territorial en áreas estratégicas, y se aseguró la efectividad de la estrategia del secuestro, en especial de militares, policías y políticos, junto con el secuestro de civiles con fines extorsivos. Derrotismo y pesimismo eran una situación extendida en Colombia, tanto entre los funcionarios públicos de las diferentes áreas como entre los ciudadanos, y ello en parte explica que la fotografía de la campaña electoral del entonces competidor por la presidencia, en 1998, Andrés Pastrana, con el comandante legendario de las FARC, tuviera un papel determinante en los resultados y el inicio de un gobierno que se jugó una doble carta. De una parte el gobierno Pastrana asumió un proceso de paz singular y pionero en conversaciones políticas directas con las FARC, seguidas en muchos de sus aspectos a través de los medios de comunicación, contando con gran asistencia y apoyo internacional, comenzando por los Estados Unidos y muchos países europeos, que abrieron sus puertas a los delegados de la guerrilla y los funcionarios estatales. De otra parte, y al mismo tiempo como una cara complementaria con la anterior, la administración Pastrana inició una modernización de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia, con el fin de asumir el problema de fondo del conflicto colombiano: el control territorial.

Lo paradójico con lo expuesto en los párrafos anteriores es que Colombia, como sociedad y como Estado se encuentra en una situación institucional que podríamos definir como fuerte, en la medida en que sus períodos democráticos, tanto en el ejercicio del rito electoral como en el respeto y mantenimiento del ejercicio del poder soberano, son una constante; la estructura del Estado se ha fortalecido en medio de los conflictos militares, de seguridad y de la amenaza que supone la delincuencia organizada, creada en las últimas décadas a partir del narcotráfico; las reglas y el cumplimiento de la justicia en Colombia tienen un amplio apoyo social; y a la vez existe una fuerte convicción de que los procesos políticos están

respaldados por una estructura constitucional moderna, protegida por una reconocida corte constitucional. Esta construcción institucional se enmarca en la herencia de problemas políticos de envergadura, siendo también la condición paradójica de la construcción de las fortalezas colombianas.

LOS PROBLEMAS HEREDADOS

Colombia ha heredado una serie amplia de problemas y de situaciones de contraste, que en algunas ocasiones, como recientemente lo ha señalado la revista *Foreign Policy*, suelen ser asumidas por muchos analistas como prueba de que éste es un Estado y una sociedad fallidos y en camino de descomposición. En este apartado presentaré algunos de los desafíos actuales que se inscriben dentro de los problemas heredados de Colombia, y cómo influyen en su actual dinámica de seguridad y transformación política.

Cada elemento será considerado de manera precisa y sucinta, de modo que el contraste con lo planteado en la segunda parte sea evidente. En esta consideración existe un punto de partida, expresado con claridad por Eduardo Pizarro Leongómez, al tratar el problema de los actores armados no estatales en Colombia, con las siguientes palabras: "Por una parte [existe], la histórica debilidad del Estado colombiano que, desde sus orígenes en las luchas de Independencia a principios del siglo XIX, ha sido incapaz de controlar el conjunto del territorio nacional. Por otra parte, y con base en este precario control territorial, los grupos guerrilleros tomaron la opción estratégica del desdoblamiento constante de los frentes guerrilleros con objeto de ir lentamente copando el conjunto del territorio nacional. Este desdoblamiento, en un territorio de las complejidades extremas de Colombia, agudizó la ya crónica incapacidad del Estado".¹ En este sentido es necesario mencionar que diferentes analistas han construido un consenso implícito referente a que en el período de 1995 a 1998 se produjo una percepción de pérdida de la guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, debido a la capacidad que estas experimentaron para hacer una guerra de posiciones, con el objetivo de copar el territorio y avan-

zar a la toma del poder. Dicha estrategia había sido definida en los documentos de esta organización como la “Nueva Forma de Operar”.²

A este desafío el gobierno de Andrés Pastrana respondió de dos formas: una internacional, enmarcada en lo que inicialmente se llamó Plan Colombia, tendiente a crear un acompañamiento internacional de una posible solución para la guerra en Colombia, que se debería jugar en un doble escenario: el de la guerra y el de las negociaciones de paz y una de política nacional que fundamentalmente estaba orientada a la ejecución de una reforma militar y al fortalecimiento de la presencia del Estado, aprovechando además los recursos económicos y de cooperación conseguidos con la nueva estrategia diplomática. Este cambio fue sensible en el plan de las reformas militares emprendidas en el gobierno Pastrana,³ que lograron frenar y conducir a las FARC a cambiar su estrategia y objetivos de guerra, en tanto han tenido que regresar a practicar la guerra de guerrillas, alejándose por el momento de una guerra de posiciones. Sin embargo dicha situación no puede ser asumida como una derrota de las FARC, pues como lo ha dicho Alfredo Rangel, simplemente puede ser síntoma de una espera táctica y de un proceso de reacomodo.

Frente al problema de la concepción estratégica del control y defensa del territorio es importante destacar que el gobierno Uribe ha partido de una posición poco frecuente con respecto a gobiernos anteriores, toda vez que ha puesto como elemento prioritario para su gobierno el dar respuesta al desafío de seguridad y control territorial.⁴ No obstante tal elemento positivo de ruptura, el Estado colombiano sigue estando carente de una concepción estratégica de conquista, control y defensa del territorio, que conduzca al Estado a asumir su responsabilidad como garante de la unidad nacional de forma completa, a pesar de que no experimentamos soberanías escindidas ni Estados dentro del Estado, teniendo claro que el conflicto colombiano está determinado por un desafío sobre el control territorial, en especial en inmensas zonas caracterizadas por un vacío de poder sólo paliado simbólicamente, y por la falta de una efectiva monopolización institucional de la violencia.⁵ En dicha política de defensa, el Estado colombiano ha comenzado a caminar sobre la ruta de los Estados modernos para construir institucionalidad, poder político y control territorial, pero es necesario superar, con concepciones estratégicas, los obstáculos plante-

ados por una burocracia administrativa ajena a las amenazas del Estado y por una burocracia militar y de fuerzas estatales acostumbradas a convivir con la falta de control territorial. El documento inicial de la presidencia Uribe marca un derrotero importante, pero aún está en la fase inicial.

Del punto anterior se desprende que sólo con una política estratégica de defensa del Estado y del territorio, de conquista de las zonas caracterizadas por vacíos de poder y de monopolización de la violencia, se pueden identificar las zonas que representan los valores estratégicos más importantes para el Estado. Dichas zonas permiten la creación de mecanismos de aseguramiento del territorio, haciendo que sea necesario priorizar de acuerdo con estos valores estratégicos las acciones a ejecutar en determinadas situaciones de confrontación y conquista del territorio. En el caso colombiano resalta una característica de la sociedad: éste es un país urbano, y desde el siglo XIX sus núcleos poblacionales, sociales y económicos se han definido alrededor de áreas urbanas específicas. Esto deja una consecuencia directa: el principal objetivo estratégico del Estado colombiano debe ser el asegurar las zonas urbanas vitales y las zonas rurales que las interconectan, de forma que constituyan zonas seguras de manera abierta. De estas áreas controladas por el Estado se pueden desarrollar estrategias de control del territorio y de copamiento de las zonas de vacío de poder. Pero, como lo ha analizado Román Ortiz, en ocasiones la tentación política del rédito democrático y electoral para la definición de las operaciones militares, puede hacer que se opte más por la vía del impacto y la exactitud, caracterizada con el nombre de “la estrategia de la bala de plata”, que por la vía lenta del aseguramiento del territorio.⁶

Aquí queda un interrogante en la actual coyuntura: ¿será el Plan Patriota uno para apuntar a la “Bala de Plata” más que a un aseguramiento de los territorios dominados, como demuestra el rebrote de la guerrilla y el inacabable fuego paramilitar en zonas que se creen controladas? Es decir, si bien es cierto que las cifras referentes a tomas de poblaciones, la destrucción de la infraestructura de forma rotunda y la proliferación del secuestro masivo han disminuido, también lo es que la guerrilla suele dar golpes en lugares que se creían dominados o se encuentran en procesos de reorganización, como el Oriente antioqueño, Cundinamarca o algunas zonas rurales que rodean a Cali.

En cuanto al problema del copamiento, el gobierno Uribe ha dado un cambio de política con respecto a lo expresado en el documento de defensa y seguridad democrática, y con respecto a los cambios que se venían haciendo frente a las concepciones de copamiento y uso de la fuerza para el cubrimiento del territorio. En efecto, desde el gobierno Pastrana se presentó una clara recomposición de las fuerzas de carabineros como una fuerza dentro del cuerpo de la policía, encaminadas y dedicadas a conquistar y controlar zonas urbanas perdidas por el Estado en diversos momentos de la confrontación, a la vez que estaba destinada a penetrar en zonas conflictivas o caracterizadas por vacíos de poder. El gobierno Uribe decidió crear una fuerza de copamiento de carácter ligero y poca capacidad de combate, y que puede ser rebasada con cierta facilidad, definida en el programa de “soldados campesinos”. Dicha fuerza tiene además la desventaja de que no tiene posibilidades de ejercer funciones policiales ni capacidades de investigación, ni intervención en asuntos civiles de manera directa.

En este punto del copamiento también han sido subvalorados los asuntos referidos al crecimiento urbano, la creación y fortalecimiento de nuevas poblaciones que permitan llenar zonas de vacíos de poder, y la generación de mecanismos de crecimiento económico e interconexión social. El crecimiento demográfico es un elemento además de seguridad nacional, en la medida en que la ocupación del territorio implica construir redes institucionales y demandas de servicios estatales, lo que impide que los grupos ilegales armen retaguardias en lugares en donde se pueden sentir “autoridad en sentido pleno”. En esta dirección es posible ver que los grupos ilegales en Colombia, guerrillas y paramilitares, han constituido formas de actuar paralelas al Estado, y dado lugar a una noción propia de geografía política.⁷

Respecto a la seguridad urbana, que se enmarca directamente en un problema de criminalidad común, en Colombia, conectada y especializada con la presencia del narcotráfico desde finales de la década de 1970, se ha tenido la tentación, con la aceptación a veces explícita de la población ante la incapacidad del Estado, de una connivencia ambigua con grupos de autodefensas ilegales. El caso más dramático se presentó en Medellín, en donde a la penetración de las FARC en la comuna 13, y luego de las operaciones de desalojo de ésta en el 2002, se produjo como res-

puesta, no combatida por el Estado, la presencia de grupos autodefensas, que luego han realizado en el 2003 un proceso de paz y reinserción aislado y marcado por la desconfianza. En éste es importante resaltar que Colombia sigue teniendo un grave déficit de seguridad urbana, acrecentado por una debilidad notoria en los cuerpos de policía y en la lentitud en el ejercicio de justicia y castigo de crímenes y faltas a la ley.

En lo referente a las acciones de los organismos de inteligencia, Colombia registra una clara dependencia de la colaboración que los organismos de gobiernos amigos quieran hacer, y básicamente enmarcado en los principios de combate al tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Ello se registra en el hecho de que la comunidad de inteligencia extranjera tiene muy alta injerencia e información sobre los asuntos que involucran a Colombia en el ámbito internacional. De esta manera, mientras que este aspecto no se mejore a través de que el Estado colombiano construya sus propias redes de información e inteligencia internacional, el Estado registrará una permanente ceguera sobre cómo se configuran y cómo se ejecutan las amenazas a su estabilidad, muchas de las cuales están creadas y puestas en marcha desde el exterior. Aquí se debe destacar además que las actividades de inteligencia primordiales deben ser básicamente desarrolladas por organismos civiles, dirigidos directamente por el Estado, sobre la base de crear mecanismos viables de control civil, como garantía de la democracia. En el ámbito de la política interna las necesidades de desarrollar buenas acciones de inteligencia y evaluación correcta de la información, han sido claras desde los desastres militares entre 1996 y 1998, y con las acciones ejecutadas en las áreas urbanas, donde el Estado aún se mueve a tientas.

La política diseñada por la administración Uribe de crear redes de informantes es una estrategia de contención marcada por el desespero, que puede terminar en graves costos políticos para la democracia, como de hecho viene sucediendo con el asesinato de algunos de los señalados por estas redes. En este punto, y como muestra la experiencia internacional, es necesario apuntar que el Estado colombiano debe concebir que una de las fortalezas de la seguridad interna pasa por la creación de programas de inteligencia eficientes, y que monitoreen constantemente las amenazas que se presentan, se transforman o surgen en cada contexto.

En conclusión, si bien se ha avanzado frente al problema de la seguridad y el control territorial, aún faltan tres elementos importantes: crear una concepción estratégica de la seguridad y el territorio que responda a una política de Estado, superando los procedimientos de los gobiernos de turno. Dos, crear seguridad no puede significar permitir las acciones de grupos ilegales, llámense autodefensas o paramilitares (incluyendo a los nuevos narcotraficantes vestidos de paramilitares), que se declaren enemigos de la guerrilla, pues ello es el mismo problema de diferente forma. Y tercero, la reforma militar de la administración Pastrana ha dado en un punto clave, sobre la cual la administración Uribe ha podido erigir la política de seguridad democrática, pero aún quedan asuntos por construir como política de seguridad, en temas tales como la fuerza de copamiento, la estructura, doctrina y responsabilidad de dicha fuerza y la construcción de una estructura institucional que asegure la continuidad de dicha política. En el tema de la inteligencia se debe destacar que Colombia no puede depender de la buena voluntad de los gobiernos extranjeros frente a las necesidades de recabar la información necesaria para actuar sobre las amenazas a su estabilidad, a la vez que debe tener claro los panoramas de acción internacional para mantener en pie su seguridad. En el plano de la política interna la inteligencia es fundamental, pero no debe ser confundida con el señalamiento indiscriminado ni con el derecho a la disidencia política que permiten los sistemas democráticos.

LAS FORTALEZAS: UNA CONTINUIDAD ENTRE EL AZAR Y LA HISTORIA

El historiador británico Malcolm Deas, al iniciar con su capítulo el libro "Fortalezas de Colombia",⁸ compilado por Fernando Cepeda Ulloa, trae a colación una frase atribuida a Simón Bolívar, que permite, según el historiador, ilustrar el carácter social y político de Colombia: "Caracas es un cuartel, Santa Fe, una universidad y Quito, un convento". En perspectiva histórica, tal frase permitiría vislumbrar que "La tradición civilista de Colombia, no importa lo que uno piense de sus virtudes o vicios, es cierta, y larga, sin duda".⁹ Tal situación es palpable en el hecho de que el Estado

colombiano tiene una composición caracterizada por una herencia colonial administrativa¹⁰ antes que territorial, militar, urbana, económica o social. De allí que al momento de la fundación de la república exista una profunda separación entre los grupos que dirigen la sociedad y los que la conforman, de donde se deriva la mayoría de los conflictos y las guerras civiles del siglo XIX. Los primeros tenían como modelo de organización y estructuración del Estado y la nación las referencias europeas,¹¹ y los segundos establecían el límite de las acciones de los primeros alrededor de sus localidades y regiones. En este escenario actúan los partidos políticos sin lograr nunca limar las diferencias y asperezas entre lo nacional y lo regional, y por el contrario se convirtió en parte de los elementos que han definido, todavía en lugares rurales contemporáneos, la identidad local, delimitando las formas de la ciudadanía y el imaginario de los derechos posibles dentro de esa ciudadanía.

Para entender mejor este asunto acudo a Charles Tilly, tomando parte de su idea de formación de los Estado-nación modernos, cuando afirma que los estados son fundamentalmente organizaciones surgidas de la capacidad militar de controlar de manera eficiente una población y un territorio, con algún grado creíble de aceptación por parte de los gobernados, donde el control del territorio y el mantenimiento de las instituciones permite una continua competencia por los recursos. En este punto son fundamentales las ciudades y el control de las mismas, toda vez que las áreas urbanas son los lugares donde se concentran, desde la antigüedad, el comercio y la producción tecnológica de herramientas, armas y demás objetos artesanales o de alguna industrioidad, al igual que es en ellas donde, de una u otra manera, se genera el mercado y se concentra el capital.¹²

Lo anterior hace que el Estado necesite no sólo tener un ejército y unas instituciones, sino entrar en relaciones directas con las ciudades que se encuentran en su territorio, pues es de ellas de las que en últimas depende la supervivencia a largo plazo del Estado mismo. Esto permite diferenciar a los Estados así: a) intensivos en capital, que son aquellos que tienen acceso a fuentes financieras vitales, como impuestos permanentes y fluidos, de además de tener en qué invertirlos, desde obras de infraestructura, hasta la fabricación de armas y herramientas; y b) estados intensivos en coerción, que se han caracterizado más por acudir a mantener la

obtención de recursos en amplias zonas rurales o en ciudades de bajo desarrollo, y que por tanto el efecto de la coerción resulta más vital, que la transacción rápida y el cobro de impuestos en las ciudades más concentradas económicamente y de mayor densidad demográfica.¹³

Existe, sin embargo, un tercer tipo de Estados donde capital y coerción pueden combinarse para dar lugar a una forma más estable en el tiempo y en el espacio de organización estatal, pues se pueden guardar proporciones de fuerza importantes para la estabilidad desde la competencia con otros Estados, y para evitar que surjan enemigos internos lo suficientemente fuertes. A la vez, el acceso al capital pone de manifiesto la posibilidad de generar un ingreso constante que permite realizar inversiones a largo plazo y correr con los gastos de mantenimiento de las instituciones, de acuerdo al tamaño requerido en éstas con respecto a población, territorio y recursos, asunto principal en las instituciones militares.¹⁴ Estos estados, denominados por Tilly como de coerción capitalizada, suponen una mayor efectividad en la centralización del poder y en la concentración de medios para la dirección de la sociedad.¹⁵

En el caso colombiano, como quizá sea el contexto de la América hispánica, el estado moderno heredó un estado que se conformó con base en una reforma administrativa que creaba el virreinato de la Nueva Granada a mediados del siglo XVIII, adjudicando un mandato ambiguo sobre zonas disputadas con otras jurisdicciones imperiales como las de Popayán y Pasto al sur, pertenecientes a la audiencia de Quito, y que se extendían hasta el Chocó; Panamá como capitán general en el istmo y con una notoria importancia en el comercio con los centros peninsulares ibéricos, y con la capitán de Venezuela, disputando un territorio imaginario en los inexplorados y no conquistados llanos orientales. Pero no sólo le extendía un mandato sobre estas zonas de ambigua delimitación, sino que adicionalmente tuvieron que entregarle subvenciones provenientes del Perú para su funcionamiento, pues los impuestos que alcanzaba a recoger no cubrían los gastos de mantenimiento de las instituciones estatales y de la organización militar. De hecho el mantenimiento del ejército se limitaba de manera básica a la defensa del fuerte de Cartagena y el puerto de Santa Marta, y a unas cuantas tropas, conformadas por indios y mestizos, en Bogotá. Esto hace que al momento de la Independencia, la Nueva Grana-

da estuviera conformada por nueve regiones prácticamente semiautónomas: Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Bolívar, Magdalena y Panamá. En estas zonas el Estado central tenía una existencia débil para los funcionarios locales y regionales, y para los individuos de a pie la ciudadanía era la forma de la vinculación con los órdenes inmediatos de organización política y administrativa.

Cada una de estas regiones tenía además complejos urbanos claramente diferenciados, con economías separadas y en ocasiones semi-autárquicas, mecanismos y rutas de transporte autónomas y conectadas directamente con el comercio internacional en tanto que estaban desconectadas del comercio interregional, a la vez que con dispositivos de gobierno y administración enteramente locales, desvinculados de conexión efectiva y obediencia real a Bogotá, o incluso en condiciones contra ésta como era el caso de Popayán, Pasto, Caracas y Panamá, sin hablar aún del aislamiento de ciudades como Medellín, que sustituyó a Santa Fe de Antioquia como capital de Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y la misma Tunja, rival colonial de la capital. Adicionalmente las ciudades que se habían fundado en la Colonia tenían una función principal de paso, de estacionamiento temporal, toda vez que no eran para la acumulación de grandes capitales, pues éstos iban dirigidos a Europa, quedando las ciudades prácticamente vaciadas de posibilidades de acumulación de capital, y las personas que vivían en ellas eran principalmente mestizos, indios, mulatos y negros, que estaban al servicio de los españoles o de criollos pudientes.¹⁶ Eran ciudades que no estaban pensadas para el asentamiento permanente de europeos, y por tanto sus estructuras eran endémicas y transitorias comparadas con las europeas y diferían notoriamente de las ciudades fundadas en Norteamérica, que fueron creadas para una habitación permanente y la construcción de instituciones paralelas a las europeas.

Frank Safford ha explicado con claridad cómo los obstáculos geográficos son de los más importantes en impedir una integración nacional e institucional efectiva en Colombia, lo que se ve por ejemplo en los difíciles procesos de comercialización de la harina de trigo de la cordillera oriental con Cartagena o con Antioquia, pues resultaba para los últimos más barata comprarla en Estados Unidos,¹⁷ demostrando además que no existió,

hasta mediados del siglo XX, un mercado nacional para productos elaborados por las diferentes regiones. Estos obstáculos tienen clara incidencia en el desarrollo y mantenimiento de la guerra y del Estado a largo plazo y hacen que ésta, la guerra, sólo sea un objetivo rápidamente abandonable; es decir, a pesar del constante ejercicio de la guerra, el Estado nunca estuvo adecuadamente preparado para ejecutarla y llevarla hasta el final, obtener una conquista territorial y un sometimiento de los poderes locales y regionales al poder central, por su incapacidad material y política tanto para mantener, formar y dirigir un gran ejército, como para expandir las instituciones nacionales con recursos y respaldo suficiente para que funcionaran por encima de las redes locales de relaciones, poder, intercambio económico y reconocimiento social.

Así, la guerra de Independencia sólo se mantiene por la expulsión de los españoles pero no en la dirección de la integración territorial sino como una vinculación federada implícita de las regiones que formaban la Nueva Granada, toda vez que las exiguas riquezas existentes hacían imposible la creación de un Estado permanente y de presencia en todo el territorio que había tomado, ni siquiera un Estado modesto, pues éste no tenía con qué existir ni con quiénes mantenerse, como fuerza profesional, ya fuera militar o burocrática. El Estado colombiano no se funda entonces, volviendo a la referencia a Tilly, ni sobre una primacía del capital y menos sobre una primacía de la coerción, pues la mayoría de las fuerzas militares, en el momento de la Independencia hasta bien entrado el siglo XIX, eran provistas por regiones que no eran neogranadinas sino que provenían de Venezuela.

Aquí surge una situación adicional, y es que sólo hasta la mitad del siglo XIX el Estado colombiano va a sentir la necesidad de conocer el territorio sobre el que gobierna, al igual que tener una idea de las poblaciones, las personas y los recursos que se tienen, lo que impulsa a crear la Comisión Corográfica, en medio de un territorio que es menos que un país, es más un mosaico, una colección casi indescifrable de poblaciones, intereses, identidades, y, sobre todo, de historias profundamente separadas.

Las diferencias regionales y sus distancias sociales, económicas y políticas crean un cuadro de comportamiento común en el siglo XIX: la

guerra civil es la expresión de unión versus separación entre regiones, que en la mayoría de casos veían al Estado central como un obstáculo en el desarrollo de una sociedad fuerte y claramente cohesionada; la tendencia regionalizante toma desde el comienzo la opción del federalismo y con ella construye sus nociones de sociedad y cohesión.¹⁸ De hecho las primeras guerras civiles suceden inmediatamente después que se declara la independencia en 1810, prolongando la devastación y retrasando la recuperación económica y la construcción institucional hasta los caóticos años de la década de 1830, después de superadas las guerras y las broncas provocadas por las políticas bolivarianas, la oposición de los santanderistas, los intereses regionales y la confusión social. Con todo ello, el Estado intenta construir un ordenamiento racional desde un lejano centro político, Santa Fe de Bogotá, que, al parecer, ha ocupado la mayoría de las observaciones políticas sobre el siglo XIX, y donde las referencias de construcción de la nación van desde un anhelo puro y duro de la Revolución y la República francesa, por parte de un puñado de políticos, comerciantes y líderes que se autodenominaron liberales a partir de la década de 1840, hasta la defensa a ultranza del carlismo y de una especie de nacional catolicismo que encarna la idea del mantenimiento del orden y la institucionalidad colonial, en algunos casos incluida la esclavitud, como entre los conservadores del Cauca.¹⁹

Esta situación determina que el Estado colombiano surgido en el siglo XIX esté constantemente amenazado por factores que no tiene ni como controlar ni como gobernar: no puede controlar el cobro constante de los impuestos de forma eficiente y enfrenta frecuentes huelgas de parte de los recaudadores; no tiene ni ejército ni doctrina militar ni dirigentes con formación política propiamente, más allá de curas, periodistas²⁰ y abogados, continuando las tradiciones coloniales, y entre las que los intentos de crear una elite y un cuerpo de profesionales técnicos no tiene ninguna incidencia como lo muestra la escasa penetración en la dirección social y política del país la creación de la Universidad Nacional, la creación de los diversos colegios de artes y oficios, al igual que la inestabilidad en la creación de los colegios militares que se trataron de crear hasta bien entrado el siglo XX. La profusión de guerras civiles generales, es decir, de carácter

nacional, y de carácter limitado o regional, habla por sí sola: alrededor de 70 conflictos armados, incluyendo revueltas, en las cuales el Estado siempre estuvo a prueba en su capacidad para sobrevivir, quizá un poco maltrecho. De estas confrontaciones nueve fueron propiamente nacionales: 1812, 1839-42, 1851, 1854, 1860, 1876, 1885-86, 1895 y la guerra de los Mil Días (1899-1902).

El principal trasfondo de estas guerras en el siglo XIX fue la lucha entre las aspiraciones federalistas de las regiones,²¹ más encaminadas a una construir una especie de confederación interestatal que una ligazón de autonomías limitadas sobre la base de una ciudadanía común compartida, y la confrontación, casi siempre poco creíble, con un poder central organizador y creador de una institucionalidad que fuera visible y dirigible ecuánimemente. La poca credibilidad estaba asociada a la divergencia de los intereses regionales y a una especie de primacía de Bogotá y los bogotanos en el manejo y la dirección del poder nacional, a la que se oponían con mayor o menor intensidad la mayoría de las regiones, pero de las cuales Bogotá logró controlar con cierto éxito algunas como Tunja, Santander, y las zonas de la cordillera oriental. A este control se opusieron de forma férrea y casi constante los pastusos y los payaneses, los antioqueños, los panameños y los costeños.

Aquí se unen el desconocimiento por parte del Estado de la sociedad y el territorio que gobernaban, y la falta de reconocimiento y legitimidad de la sociedad hacia éste. Tal situación necesariamente conduce al período de hegemonía liberal consagrado a la total federalización y al desmonte del Estado central y sus formas de poder.²² Esta federalización estaba precedida por las prácticas de reforzamiento de las identidades locales con políticas como ceder a las municipalidades impuestos nacionales, asegurándoles ingresos que muy difícilmente el Estado volvería a encontrar, y el derecho de escoger a los párrocos, según una ley de 1851,²³ fortaleciendo con ello la oposición a los mecanismos de control político e institucional desde el poder central.

Las guerras civiles y la definición de los poderes y las instituciones estatales, que se van a tardar hasta la segunda mitad del siglo XX para verse de manera coherente, pueden ser interpretadas como mecanis-

mos de construcción de relaciones interregionales, de donde resulta que el reconocimiento al Estado solo proviene de la capacidad militar, siempre pasajera, que éste pueda tener en un momento determinado, pues siempre puede ser más o menos fácilmente derrotable o impugnado su poder. Esto es claro en el golpe militar de José María Melo en 1854, y en la subsecuente guerra civil, donde el Estado con un ejército insignificante puede ser derrotado y quedar a merced de prácticamente la única guarnición existente en todo el territorio nacional, y el Estado tiene que defenderse a partir de la composición de fuerzas guerrilleras, con oficiales improvisados o generales autoproclamados, constituidos como tal por su poder económico, su prestigio social o sus credenciales políticas, pero nunca su pericia o formación militar. La guerra de los Mil Días, y la proclamación mítica de sus hazañas es una clara muestra de un estado prácticamente inexistente en lo militar, y con ello en su doctrina de seguridad, control del territorio y mantenimiento de formas institucionales.

Uno de los efectos más interesantes de la incapacidad y desmantelamientos institucionales del Estado, en especial en lo militar, es que la guerra, y la violencia en general, tanto la de origen político como la de origen social, para el siglo XIX, y probablemente sobre la misma lógica para el siglo XX, tienen el cariz de ser una especie de derecho que los hombres prestantes de cada región podían usar cada vez que se encontraran en desacuerdo con el Estado. Tal situación se fundamenta en una acción práctica y es cuando se comienza a considerar y ejercer la violencia como un arma política, complementada con la práctica de la venganza, tanto por motivos políticos como personales.²⁴ Este derecho está precedido por la consagrada y deliberada debilidad del Estado, puesto en estas condiciones tanto por liberales como por conservadores y ello debido a diversas razones, en las que lo más importante es la ausencia continuada de recursos, lo que en momentos de guerra se suplía con imposiciones financieras, préstamos de obligatorio cumplimiento y apropiaciones acompañadas de servicios personales. Además se argüía que el estamento militar era una amenaza constante frente a los requerimientos de mantenimiento de la “república”.

Aquí es importante destacar que en la sociedad colombiana los grupos guerrilleros, desde el comienzo del siglo XIX, han tenido valores políticos específicos y destacados: son organizaciones cuyo fin es llenar el espacio de poder que el Estado no puede o no quiere atender, y que pueden estar conformadas por terratenientes, o campesinos o mineros, o cualquier tipo de individuos que colectivamente necesitan construir un respaldo político y militar específico. De aquí que la guerrilla sea una especie de forma “natural” en la ausencia de estructura política e institucional que monopolice la violencia, convirtiendo la anarquía en procesos institucionalizados, proveyendo para sus miembros, como se hizo durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, con algunos casos hasta hoy, movilidad social y económica en procesos de negociación con el Estado central²⁵ y la adjudicación de beneficios económicos, que bien podían ser a través de la normalización de la tierras de colonización o una compensación con dinero o con puestos políticos.

Toda esta situación trae una consecuencia política observable desde la perspectiva de Tilly: si bien para el Estado, en la teoría que explica la formación de los Estados modernos en Europa Occidental, por ejemplo, la guerra fue un motor evidente de desarrollo político e institucional, en Colombia no fue exactamente la capacidad del Estado para hacer guerras, ganarlas y mantener las instituciones de gobierno y control necesarias lo que lo mantuvieron en pie. Fue más la incapacidad de crear estados sólo un poco más fuertes desde las regiones lo que permitió que el Estado colombiano se mantuviera unido, empezando por sus diversos problemas de identidad institucional y territorial. Estos problemas de identidad son relevantes cuando se mira la diversidad de nombres recibidos por el país: en 1810 surge como República de Colombia o la Gran Colombia, que incluía los territorios del virreinato de la Nueva Granada, capitánía general de Venezuela y la audiencia de Quito; en 1830 se fragmenta en tres repúblicas, de donde surgen la república de Venezuela, la de Ecuador y la de la Nueva Granada; en 1858 intenta recuperar una posible unión con Venezuela y Ecuador y toma la denominación de Confederación Granadina, que luego es reemplazado por el de Estados Unidos de Colombia en 1863; y finalmente asume el nombre de Colombia en 1886.

El siglo XIX marca entonces los ritmos de existencia del siglo XX en Colombia: es un país altamente regionalizado, donde tanto ilustrados como José María Samper, o Luis López de Mesa, quienes justifican una regionalización por la imposibilidad de construir una estructura nacional sobre las razas degradadas que habitan el territorio y la necesidad de crear una nueva nación sobre una nueva raza, como las personas comunes, sin instrucción académica o intelectual, de las regiones, se atribuyen características de diferencias para justificar su lejanía con el poder y las disposiciones centrales, como los antioqueños que han intentado crear la idea de un origen étnico supuestamente distinto al del resto del país,²⁶ o los pastusos siempre proclives a oponerse a cualquier integración nacional sobre la base de evitar perder su idiosincrasia, un ejemplo de esto es la guerra de los Supremos –1839,1842– y las diversas manifestaciones, hasta fechas relativamente recientes en las que los pastusos han pedido su anexión al Ecuador. Esto conduce a un aislamiento que tiene claros usos políticos a favor de los grupos regionales, quizá solo integrados por el discurso de los partidos políticos, y sobre los que se supone que descansa la formación de la nación, y no en el Estado, lo que adicionalmente no es exacto, pues los partidos se dedican a construir mecanismos locales de fidelidad e identidad, con las lealtades de la Iglesia de por medio, como lo dejan ver las guerras de 1876, 1886 y 1899-1902.

El cambio de siglo se presenta sobre el supuesto del mantenimiento del Estado Central, que sólo hacia finales del siglo XIX logró conquistar e imponer la acuñación y circulación de una moneda única, por encima de los intereses y las prácticas regionales, donde la mayor parte del siglo XIX se comerció con monedas regionales o con monedas emitidas por bancos privados y regionales, sobre todo después de la década de 1870.²⁷ Impone unos símbolos patrios que por primera vez van a uniformar las expresiones políticas y logran imponer la idea de las fiestas nacionales, en clara lucha con la Iglesia, la que se sigue encargando, hasta hoy, del mantenimiento de un porcentaje entre el 35 y el 50 por ciento de la educación del país.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: LA NACIÓN ENTRE EL RELATO DE LA VIOLENCIA Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA GUERRA

En las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX Colombia se dirige hacia un proceso de modernización caracterizado por cuatro situaciones: primero, urbanización tardía pero acelerada; segundo, interconexión terrestre; tercero, una primera explosión de los medios de comunicación con la radio y la prensa; y cuarto, el surgimiento de una lenta transformación de las identidades locales, aunque sin un rumbo estrictamente definido por algún nacionalismo de estado o por algún nacionalismo promovido, por ejemplo, por intelectuales o por grupos sociales específicos.

Lo importante desde la perspectiva propuesta en este trabajo es que el contraste más interesante que se puede intuir, entre el siglo XIX y el XX, es la violencia. Si bien el siglo XIX fue abundante en confrontaciones armadas, al parecer la vida cotidiana de las localidades y las regiones, salvo las zonas de colonización, era bastante tranquila, y transcurría sobre rutinas conocidas, pocas veces alteradas. Una de las maneras de verlo es cuando se puede observar que en algunas de las prácticas cotidianas con algunas manifestaciones de plasticidad como la pintura, la música, e incluso la novela, asumida como la posibilidad de expresión fuerte de las corrientes de pensamiento y motivación de una sociedad en algún momento de su historia tenían un fuerte componente regional que se oponía a una concepción nacional, o que simplemente la desconocían. Al respecto se encuentra el trabajo de Raymond Williams, que muestra cómo las novelas propiamente nacionales provienen de una limitadísima cuenta: en su trabajo de 1987, él afirma que estas son tres: *María* de 1867, de Jorge Isaacs; *La Vorágine* de 1924, de José Eustasio Rivera; y *Cien años de soledad* de 1967, de Gabriel García Márquez.²⁸

El lentísimo tránsito de lo que podríamos denominar la desregionalización de Colombia, es decir, la integración de las regiones y la primacía ya no desafiada del Estado a la manera total en el estilo del siglo XIX ha conducido a mecanismos de reconocimiento, integración y cohesión social, y construcción del marco institucional, determinados por la violencia y por una especie de guerra que ocupa la mayoría de los espacios so-

ciales, económicos y políticos, y las áreas geográficas que el Estado no había tomado en toda su historia, pero que fue visible en la medida en que se desplazó de estos espacios y áreas, más característicos de la Colombia del siglo XIX, hacia las zonas donde se concentraba la población, los recursos económicos y políticos, y un elemento nuevo para la sociedad colombiana: el reconocimiento internacional, en tanto la presencia de empresas y gobiernos extranjeros se consolidó durante el siglo XX.

En este proceso juega un papel importante la llamada “Violencia Clásica”, también denominada violencia partidista, que abarcó los años entre 1946 y 1964,²⁹ y que se caracteriza por ser una lucha entre dos tensiones que generaban violencia en sí mismas:³⁰ de una parte había una lucha tenaz y profunda entre las “elites” liberales y conservadoras por imponer modelos de modernización desde el Estado, a los demás sectores de la sociedad. Al otro lado de la contención se encontraba un proceso de profundo sectarismo arraigado en las identidades locales que comenzaban a desgarrarse en virtud de una urbanización imparable y una modernización que imponía secularización y laicización.

Las cotas más altas de esta violencia están determinadas por las acciones que se concentran en el período de 1948 y 1953, que comienza con el asesinato de quizás el único prospecto de populismo³¹ que ha existido en Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, de quien podemos decir, siguiendo a Deas,³² había creado una atmósfera de uso de la violencia como en una especie de acto de creación de identidad de masas maleables y manipulables al vaivén de las acciones políticas. Este asesinato produce “el bogotazo”, y con él viene un período intenso de confrontación que se prolonga de manera directa hasta 1953 cuando los diferentes grupos armados, constituidos bajo el modelo de las autodefensas campesinas para retener las zonas de colonización en su control y contra las acciones de gobiernos centrales o terratenientes, se habían organizado bajo el modelo de guerrilla, ya ampliamente conocido en Colombia desde el siglo XIX, mucho antes de las experiencias de las generaciones de izquierda en los años de 1960 y 1970. Esto conduce a un prolongado y abierto conflicto entre guerrillas liberales, conservadoras y tropas gubernamentales, que para ese momento, aunque insuficientes con respecto a la población y el territorio como una constante en Colombia, eran exaltadas por los logros en su participación

en la guerra de Corea. El número de muertos para ese momento varía, en las diferentes valoraciones presentadas, entre 80.000 y 400.000, lo que revela el carácter político y de transformación social que esto significó para la sociedad colombiana.³³ Sin embargo, el mayor alcance que se le puede atribuir a esta violencia, desde la perspectiva que defiendo, es que es desde este período y estos acontecimientos, cuando comienza a formarse una identidad nacional en Colombia, en cuanto que es el período en el que se comienza una búsqueda de explicaciones que estructuren respuestas a la pregunta de por qué la violencia parece un comportamiento colectivo aceptado, animado por sectores institucionalizados como los partidos políticos, funcionarios locales y regionales del Estado, comerciantes y dirigentes políticos locales y regionales y miembros de diferentes niveles de jerarquía de la Iglesia, y seguido con naturalidad por miles de personas. Aquí quiero afirmar tres ideas:

- Primero: la violencia se convierte en el relato que justifica en la conciencia política la ruptura del regionalismo, configurada en la forma de desplazamiento masivo y ubicación de grandes porciones de la población rural en las zonas urbanas. A la vez, para estas últimas es una de las maneras más eficaces de entender e interactuar con una población y unas regiones hasta ese momento abstractas aunque mayoritarias y a partir de ese momento en franca disminución frente a una masa urbana consolidada.

- Segundo: la violencia comienza a ocupar un lugar visible que va más allá de los simples relatos, y que involucra el período subsiguiente llamado por algunos como “las violencias”,³⁴ que en realidad son procesos diferentes y que pasa por la aparición de las guerrillas de izquierda de acuerdo a la moda y al contexto de la guerra fría, la aparición de la violencia urbana permanente, la aparición de prácticas criminales de cara a una criminalidad internacional moderna, sostenida por el narcotráfico, los asesinatos en series y selectivos, y la aparición de grupos de fuerza paraestatales que imponen modelos de acatamiento del orden, pero del orden privatizado y no del orden público como podría entenderlo el Estado.

La violencia adquiere formas de narración en tres tipos permanentes de narración y presentación: se vuelve materia literaria, como es el célebre caso de G. García Márquez explicando la masacre de las bananeras, caracterizada por la exageración puesta como explicación y justifica-

ción de las acciones de políticas de diversos sectores del país. Un segundo tipo de narración es el que viene determinado por la intervención de los intelectuales que se dedican al estudio de la violencia desde los trabajos de Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda,³⁵ hasta la creación de la famosa comisión de los violentólogos en los años 80 del siglo XX, para explicar el comportamiento “irracional” de los colombianos y sus formas de comportarse frente a la estructura institucional de la sociedad.³⁶ Una tercera forma de narración es la que se constituye a partir de la expansión de los medios de comunicación con la aparición de la televisión, en tanto la “Violencia” y las violencias se convierten poco a poco en materia prima de elaboración de guiones y programas, pero sobre todo, de espacio para la discusión “académica e intelectual” del fenómeno de la violencia.

- Tercero: es bastante significativo este asunto de que los intelectuales y los académicos, y con ellos distintos expertos en violencia, guerra, guerra civil, y una serie de expertos posteriores como lo defensores de los derechos humanos, los promotores de la paz y los “educadores civilistas”, tomen parte en la profusión de discursos y abanicos de análisis de la violencia, pues son expresión de dos cosas complementarias: de una parte son la escenificación y la aparición del discurso “científico y neutral” de por qué sucede lo que sucede, y de por qué no sucede de otra forma, ocupando los espacios que en el siglo XIX habían tenido para una sociedad altamente regionalizada, los curas, los periodistas y los políticos que eran quienes llenaban las páginas de los periódicos y de las revistas. De otra parte estos intelectuales ocupan el espacio que nunca tuvo en Colombia la novela, pues ésta era una forma del combate político, más que una construcción literaria que tuviera trascendencia colectiva, haciendo que muchos de los textos y de los autores ligados al estudio de la violencia se conviertan, de alguna manera, en fundadores de la nación³⁷. Entre los autores más conocidos y que han jugado un papel clave en construir una imagen del país desde sus tragedias, pero en especial desde las violencias y la guerra, se pueden citar Arturo Alape, Alfredo Molano y Germán Castro Caicedo.

Los violentólogos y los intelectuales asociados al estudio de la guerra y la violencia en Colombia han refundado, quizá sin querer o sin saber, la nación, pues han aportado descripciones y análisis sobre los mode-

los de comportamiento de la sociedad, los argumentos de su justificación y la racionalidad necesaria para mantener unas formas de comportamiento fuera de dudas: por ejemplo, hace unos años hizo carrera la idea de que en Colombia existía una “cultura de la muerte”, o que era necesario que los grupos armados en pro de conseguir su reconocimiento político, y que por tanto puedan acceder a tener un papel primordial en la dirección de la sociedad, deben ejecutar los actos más violentos y sanguinarios que les sea posible imaginar, dando respuesta a un patrón de violencia que se legitima por odios establecidos por décadas, por mecanismos de intercambios que van más allá de la pobreza³⁸ y que se apegan a las maneras como se construyen los relatos de héroes y acciones aguerridas, aunque no se sepa con claridad cuáles son las estructuras y los propósitos de estas heroicidades.

Un elemento que permite ver el alcance del discurso intelectual sobre la violencia es que frecuentemente se ha dejado de lado el estudio estricto del Estado, el punto de vista de sectores presentados tradicionalmente como responsables de la violencia como ciertas agrupaciones políticas específicas, o los estamentos militares, privilegiando lo que se llamaría una perspectiva social,³⁹ tan necesaria a la hora de crear nociones colectivas de cohesión social fuera de dudas. Así, el discurso intelectual juega con el papel de construir una comunidad imaginada según el modelo de análisis de Benedict Anderson, al darle a la sociedad colombiana un carácter, una personalidad específica y al atribuirle maneras de racionalidad y determinados comportamientos frente a sus demandas y necesidades, teniendo en cuenta que esta comunidad imaginada, desde la naturalización de la violencia y la guerra, provee los sentimientos colectivos que demanda una integración regional y la emergencia de un Estado central que recientemente le ganó la competencia a las regiones y sus demandas de protagonismo, al parecer. Así, se ha tendido a presentar la idea de que la violencia es una forma especialmente legítima de proceder frente a la pobreza, la exclusión social y política y frente a todo tipo de discriminación, agravio social o político, diferencia económica o demanda colectiva, obnubilando otras fuentes históricas y otros elementos del proceso de construcción de la sociedad colombiana como son el papel del Estado y los cambios reales de la sociedad.

La acción de los intelectuales es correspondiente con la respuesta que el Estado dio al fenómeno de la violencia y sus diferentes expresiones en la segunda mitad del siglo XX, pues lo que explican es cómo la sociedad colombiana se reconstruye desde la exclusión, según dicen algunos, que significó la formación del Frente Nacional, que en últimas pretendía darle un cauce nacional a las expresiones locales de poder y a las formas radicales que el sectarismo⁴⁰ había tomado en las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX. Así, bajo la capa de la aparente estabilidad del Frente Nacional, Colombia mantuvo en línea sus vaivenes y movimientos políticos, aunque debajo de esta apariencia el país se transformaba radicalmente: las formas de reconocimiento, cambio político y racionalidad social y política dieron lugar a una sociedad que se separó en su forma de vida del siglo XIX, aunque su institucionalidad aún no define un carácter claro.

El reconocimiento y la integración en la red y el mapa de la nación pasa por la explosión geográfica de nombres, lugares y sucesos, que las noticias y los medios de comunicación comenzaron a integrar a la vida cotidiana de los colombianos en las grandes ciudades desde los años de la década de 1970, haciendo que los hechos que hacían que alguien fuera parte de la nación estuvieran asociados a alguna forma de violencia, más destacable entre más brutal, lo que además les daba status político, como lo han dicho las guerrillas y los grupos paramilitares ante sus acciones violentas, con el aval de varios analistas. La violencia hace reconocible el territorio contemporáneo, que se combina con modernización y urbanización. Y en ello aparecen nuevas formas de construcción de los referentes sociales que debido a fenómenos como la migración masiva de colombianos hacia Estados Unidos y Europa en los últimos 20 años, han aportado elementos para la comparación social en la vida cotidiana, la puesta en práctica de nuevos conocimientos, hoy obtenidos en muchas universidades extranjeras y por la inminente circulación de información de todo tipo desde que los colombianos se pudieron conectar a las redes internacionales de noticias, ocio y arte.

Dicho de otra manera, la violencia es básicamente el relato y la narración de la vinculación nacional,⁴¹ que ha conducido al establecimiento de elementos de identidad nacional que rompen los viejos modelos de identidad local y sectaria, más propias del siglo XIX y proclives a las gue-

rras civiles y al aislacionismo. Las violencias desde las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX han creado en Colombia una red de elementos comunes y un discurso de identidad nacional, que aún confuso, supone la aparición de una personalidad del colombiano. Pero esta personalidad y esta narración de la “colombianidad” deben su “formación” a una identidad que los intelectuales, y con ellos los medios de comunicación, han creído encontrar con toda firmeza, olvidando hacer una valoración directa del carácter de la institucionalidad heredada, y dotando de racionalidad política a los “actores” de la violencia, como personajes “naturales” de la sociedad colombiana.

La nación en Colombia existe, entonces, en la medida en que los miembros de las diferentes regiones que conforman el país han encontrado en una serie de hechos, llamados indistintamente violencia, guerra, guerra civil, o guerra contra la sociedad, elementos comunes que los relacionan, que les brindan auto reconocimiento, y que, a diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de la historia de los siglos XIX y XX, estos hechos se mueven por todo el territorio integrando la geografía y obligando a la existencia de un Estado que corresponda con el desafío de gobernar el territorio, integrar la población y dirigir la sociedad más allá de los partidos políticos. Esto explica que la violencia no sea una condición anormal, sino una experiencia cotidiana, y que para su reemplazo en la búsqueda de nuevas experiencias políticas conduzca a nuevas rutas de construcción de la legitimidad, como lo representa la ejecución del experimento político, social y cultural de la Bogotá contemporánea,⁴² como la cara de la nación que surge desde el centro del Estado en contra de las regionalizaciones vigentes, que cada vez suenan más como fracasos.

NOTAS:

- 1 PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo. *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Op. Cit. p. 129.
- 2 El ya citado trabajo de Eduardo PIZARRO LEONGÓMEZ expone con detalle y novedad interpretativa este período, y al respecto también se puede citar el trabajo de Andrés Villamizar, en el marco de los análisis elaborados por la Fundación Seguridad y Democracia, titulado “Fuerzas Militares para la guerra. La agenda Pendiente de la reforma militar”, Bogotá, 2004.
- 3 Esta reforma militar se concreta en los Decretos Ley de 2000, números 1790, 1793, 1797 y 1799.
- 4 Véase al respecto el documento de la Presidencia de la República “Política de Defensa y Seguridad Democrática”.
- 5 Al respecto existen varios estudios sobre las fronteras nacionales, en especial con respecto a las de Ecuador, Perú y Brasil, donde los grupos guerrilleros y paramilitares han podido crear retaguardias a salvo de cualquier acción institucional.
- 6 Román ORTIZ, “La opción de la ‘bala de plata’: Estrategias anti-liderazgo en la lucha contra organizaciones terroristas (ARI)”. Documento disponible en la página web del Real Instituto Elcano.
- 7 Un trabajo que puede ser ilustrativo en la dirección de mostrar tales geografías de la guerra es el dirigido por Fernán González, elaborado por Cinep, bajo el título de “Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado”, Cinep, Bogotá, 2002.
- 8 CEPEDA ULLOA, Fernando. *Fortalezas de Colombia*. Editorial Planeta, Bogotá, 2004.
- 9 DEAS, Malcolm. La tradición civilista de Colombia. En: CEPEDA ULLOA, Fernando. *Fortalezas de Colombia*. Editorial Planeta, Bogotá, 2004. página 35.
- 10 MELO, Jorge Orlando. E1 Salpicón de la nación. En: *Lecturas dominicales de El Tiempo*, Bogotá: (23, Nov., 1990).
- 11 El trabajo de MARTÍNEZ (Op. Cit.) provee un material importante de cómo los grupos dirigentes del país miraban a Europa como un territorio de inspiración, y muchas de acciones políticas parecen estar definidas y arraigadas en los cambios políticos que se presentan en países como Francia, Inglaterra, España, Alemania e Italia.

- ¹² TILLY, Charles. *Coerción, capital y Estados europeos, 990-1990*, Op. cit., Capítulos 1 y 2. Los planteamientos de Tilly son herederos de los trabajos de Fernand Braudel, en especial los referidos a las economías urbanas.
- ¹³ *Ibid.*, pp. 87 y ss.
- ¹⁴ VAN CREVELD, Martín. Op. cit., pp. 155 y ss. Ver también Geoffrey PARKER, “La Revolución Militar”, Alianza Editorial, Madrid, 2002. pp. 75 y ss.
- ¹⁵ TILLY, Charles. *Op cit.*, pp. 225 y ss.
- ¹⁶ PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit., pp. 75 y ss.
- ¹⁷ *Ibid.*, pp. 130 y ss., y pp. 321 y ss.
- ¹⁸ MELO, Jorge Orlando. Op. cit.
- ¹⁹ Véase el trabajo de MARTÍNEZ, Frédéric. Op. cit.
- ²⁰ Llamados publicistas según el lenguaje del siglo XIX.
- ²¹ MELO, Jorge Orlando. Op. cit.
- ²² PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit., pp. 385 y ss.
- ²³ *Ibid.*, pp. 391 y ss.
- ²⁴ *Ibid.*, pp. 82 y 83.
- ²⁵ Tomado de la entrevista con el profesor Luis Javier Ortiz, realizada en noviembre de 2002, para este trabajo.
- ²⁶ PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit., pp. 334 y ss.
- ²⁷ TORRES GARCÍA, Guillermo. *Historia de la Moneda en Colombia*. Medellín: FAES, 1980.
- ²⁸ WILLIAMS, Raymond. *Novela y Poder en Colombia*. Op. cit.
- ²⁹ PALACIOS, Marco. *Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994*. Op. cit., pp. 190 y ss.
- ³⁰ PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit., pp. 630 y ss.
- ³¹ PALACIOS, Marco. *Parábola del Liberalismo*. Bogotá: Norma, 1999, pp. 285 y ss.
- ³² DEAS, Malcolm. Op. cit.
- ³³ PALACIOS, Marco. *Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994*. Op. cit., pp. 218 y ss.
- ³⁴ PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit. pp. 630 y ss.
- ³⁵ FALS BORDA, Orlando y otros. *La Violencia en Colombia*. Bogotá, 1964.
- ³⁶ Quizá el trabajo intelectual más conocido de los que han presidido los estudios de los violentólogos es del profesor Daniel Pécaut, principalmente en su libro *Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953*. Nueva edición corregida y aumentada. Bogotá: Norma, 2001.

- ³⁷ La profusión de libros, revistas, estudios “a profundidad”, y de toda clase de discursos y conjeturas han inventado el rostro y el comportamiento de una sociedad que existe gracias a que se le nombra en su forma contemporánea.
- ³⁸ DEAS, Malcolm. Op. cit., p. 19.
- ³⁹ *Ibíd.*, p. 53.
- ⁴⁰ La noción de sectarismo presentada por Deas nos sirve para el establecer el contexto en el que lo usamos: “por sectario solemos entender una especie de compromiso a ultranza o por lo menos de fijación profunda” en DEAS, Malcolm. Op. cit., p. 48
- ⁴¹ MELO, Jorge Orlando. Op. cit.
- ⁴² Quizá exista un elemento de triunfo del modelo civilizador de Bogotá, del que habla Melo (*Ibíd.*).